



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS:

El ejercicio abusivo del derecho y las pensiones alimenticias en el Perú

Autor:

Bach. Juárez Pucse Luisita Reyna Celeste

Asesor:

Mag. Colina Moreno Mary Isabel

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Fecha de sustentación: 07 de marzo 2023

LAMBAYEQUE, 2023

Tesis denominada “El ejercicio abusivo en el derecho y las pensiones alimenticias en el Perú” presentada para optar el Título Profesional de Abogada, por:



Bach. Juárez Pucse Luisita Reyna Celeste

Autor



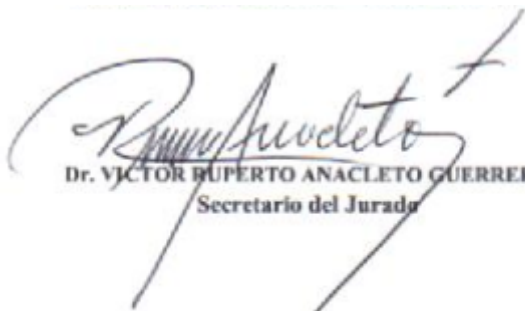
Mag. Colina Moreno Mary Isabel

Asesor

APROBADO POR:



Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
Presidente del Jurado



Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
Secretario del Jurado



Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
Vocal del Jurado.

DEDICATORIA:

A Dios, por ser siempre perfecto. A mi bebé en camino. A mi madre, por ser el motivo y fuerza que me impulsa a seguir adelante. A mi hermana, por tener esa capacidad de comprensión y lucha constante de superación. A mi sobrina, por ser una niña noble y bondadosa y a mi padre, por apoyarme desde lejos.

AGRADECIMIENTO

A Dios, mis padres, mi hermana, mi sobrina, mi bebé en camino el cual será el motivo de mi superación. También a mi asesora de tesis, por haberme guiado en este proyecto a base de sus conocimientos y sabiduría, por saber direccionar mis aptitudes.

ÍNDICE

RESUMEN	8
ABSTRACT	9
INTRODUCCION	10
CAPÍTULO I	11
ASPECTO METODOLÓGICO	11
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	11
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	14
1.1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA.....	14
1.2. OBJETIVOS	16
1.2.1. OBJETIVO GENERAL.....	16
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
1.3. HIPÓTESIS	16
1.4. VARIABLES.....	17
1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	17
1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE.....	17
1.5. MARCO METODOLOGICO.....	17
1.5.1. POBLACION Y MUESTRA	17
1.5.1.1. POBLACION	17

1.5.1.2. MUESTRA.....	18
1.6. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS, RECOLECCION DE DATOS	18
1.6.1. METODOS GENERALES	18
✓ METODO EXEGETICO JURIDICO.....	18
✓ METODO HIPOTETICO DEDUCTIVO	19
✓ METODO INDUCTIVO.....	19
1.6.2. TECNICAS	20
CAPITULO II.....	21
2.1. El derecho de alimentos.....	21
2.2. Pensiones alimenticias	25
CAPITULO III.....	29
3.1. Exoneración de las pensiones alimenticias.....	29
CAPITULO IV	34
4.1. La tutela jurisdiccional efectiva del derecho.....	34
CAPÍTULO V.....	37
5.1. El ejercicio abusivo del derecho	37
5.2. Acciones legales que contravienen la norma jurídica.....	41
CAPÍTULO VI	44
ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	44

6.1. ENCUESTAS APLICADAS A LOS OPERADORES DE JUSTICIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE.44

6.2. ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD JURÍDICA EN GENERAL 46

6.3. ANALISIS AL PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA - LIMA -2011.....51

CAPÍTULO VII.....54

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....54

7.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS54

7.2. RESULTADOS DE LA VALIDACION DE LA HIPOTESIS58

7.3. CONTRASTACION Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS62

CONCLUSIONES64

Recomendaciones65

PROPUESTA.....66

BIBLIOGRAFÍA.....68

Bibliografía68

RESUMEN

Se busca inaplicación del requisito especial regulada en el artículo 565-A del Código Procesal Civil, en los procesos de exoneración de alimentos, por propiciar el ejercicio abusivo del derecho. Para tal fin de se han trazado metas como objetivos, basados en diseños metodológicos que para este trabajo se identifica como descriptiva transaccional, con la fase dogmática de la interpretación, es por ello que se limita al análisis de la doctrina y la jurisprudencia, puesto que, al realizar este tipo de estudio, el cual ha tenido una base en la unidad de análisis que incorpora elementos que permita analizar los contenidos teóricos, así como la doctrina jurídica en torno al tema estudiado. Es en virtud de lo cual se tuvo en la construcción de la primera parte de la investigación el diseño de la metodología usada, luego en la segunda parte se trataron los contenidos teóricos, para luego centrarse en el análisis del capítulo tercero en el que se incorpora el resultado del análisis, lo cual ha permitido la construcción de las conclusiones, de acuerdo a las cuales se verifica la pertinencia de lo que se propone en esta investigación.

Palabras clave: Ejercicio abusivo del derecho, Pensiones, alimentos.

ABSTRACT

Non-application of the special requirement regulated in article 565-A of the Civil Procedure Code is sought, in the processes of exoneration of food, for promoting the abusive exercise of the right. For this purpose, goals have been set as objectives, based on methodological designs that for this work are identified as transactional descriptive, with the dogmatic phase of interpretation, which is why it is limited to the analysis of doctrine and jurisprudence, since , when carrying out this type of study, which has had a base in the analysis unit that incorporates elements that allow analyzing the theoretical contents, as well as the legal doctrine around the subject studied. It is by virtue of which, in the construction of the first part of the investigation, the design of the methodology used was taken, then in the second part the theoretical contents were treated, to then focus on the analysis of the third chapter in which it is incorporated. the result of the analysis, which has allowed the construction of the conclusions, according to which the relevance of what is proposed in this investigation is verified.

Keywords: Abusive exercise of the right, Pensions, food.

INTRODUCCION

En muchos campos del derecho, la visión sobreprotectora ha causado ciertos estragos en determinado sector de la población. Y esto se debe no solo a normas existentes sino también a la interpretación jurídica que se les da a estas, llegando a tal punto de proteger a unos y a su vez desproteger a otros. Siendo uno de los claros ejemplos la exoneración de pensiones alimenticias. En este proceso, se exige un requisito de forma es decir que el demandante esté al día con las pensiones alimenticias, la cual está regulada en el artículo 565-A CPC. Bajo la regla clara del apercibimiento de rechazarse la demanda. Sin embargo, este criterio no solo vulnera el derecho del acceso a la justicia amparada en la constitución política peruana, sino que abre una puerta peligrosa a un ejercicio abusivo del derecho por parte de la alimentista.

Y a fin de evitar mayor riesgo y vulneración de derechos la propuesta pasa por la inaplicación del artículo antes mencionado.

CAPÍTULO I

ASPECTO METODOLÓGICO

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho alimentario está inmerso en la órbita del interés superior del niño y se resuelve en base a este último; sin embargo, las decisiones en este extremo no siempre han sido las más idóneas puesto que la visión sobreprotectora ha causado ciertos estragos en determinado sector de la población. Y eso se debe no solo a normas existentes sino también a la interpretación jurídica que se des da a éstas, llegando a tal punto de proteger a unos y a su vez desproteger a otros. Siendo uno de los claros ejemplos la exoneración de pensiones alimenticias.

Esta indicación se deriva de la necesidad de establecer un equilibrio en el concepto de la satisfacción de los alimentos y la posibilidad de quien habrá de otorgarlos, en primer lugar para requerir la satisfacción de los alimentos requiere de una pre existencia de la necesidad, la cual precisará de una demostración. Es precisamente en esta fase demostrativa que no se alcanza un

claro panorama a nivel procesal, puesto que se ha convertido en una cuestión más declarativa, solo basta con la indicación de tal necesidad que impulsa al requerimiento.

Caso distinto opera en función a quien estaría obligado a prestar los alimentos, puesto que deberá presentar la documentación pertinente a fin de que se determine de manera concreta la posibilidad que tiene como obligado a cumplir con la pensión de alimentos. Luego para el caso de quien precisa de los alimentos, está condicionado únicamente a su condición de minoría de edad, la que tal vez no sea suficiente. Pese a ello, bastará con la determinación de que su minoría de edad es suficiente para determinar la necesidad en razón de la dependencia que lo caracteriza.

Estas condiciones de todos modos se plantean en el ámbito procesal para la determinación de la necesidad primero y la posibilidad después en la ruta determinante de la pensión, se presume que la existencia de este nexo vinculante con la necesidad de los alimentos, surge en base a la dependencia económica y psicológica que caracteriza al alimentista, condición que se pierde cuando alcanza la mayoría de edad, situación que debiera tener un ámbito de correspondencia directa, esto significaría que se pierda el derecho si en caso no se presenta la condición probatoria de la parte interesada.

Es en esta fase que se produce el requerimiento o la necesidad de requerir la exoneración de los alimentos en el proceso civil que se ha seguido por alimentos, en tal sentido la vinculación entre el aspecto de necesidad y la condición de quien debe otorgarlos, se contraponen, pero la regla lo ha tomado como una lucha de intereses, cuando debiera ser una fase de condición automática, que ante la falta de indicadores respecto a la necesidad, debiera anularse la obligación a fin de que no se conviertan en pensiones vitalicias.

En este proceso, se exige un requisito de forma, es decir, la parte demandada debe estar al día con las pensiones alimenticias, la cual está regulada en el artículo 565-A CPC. Bajo la regla clara del apercibimiento de rechazarse la demanda. Sin embargo, este criterio, vulnera gravemente el derecho del acceso a la justicia amparada en la constitución política peruana y abre una puerta peligrosa a un ejercicio abusivo del derecho por parte de la alimentista, pudiendo llegar hasta la restricción privativa de la libertad.

Y a fin de evitar mayor riesgo y vulneración de derechos la propuesta pasa por la inaplicación del artículo antes mencionado.

Al respecto ya hubo pronunciamiento en plenos jurisdiccionales distritales que favorecen la postura propuesta; sin embargo, tampoco ha sido aplicado al momento de resolver.

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Como la obligatoriedad del pago de pensiones devengadas conforme al artículo 565-A del código procesal civil en los procesos de exoneración alimenticia vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia e incita al ejercicio abusivo del derecho?

1.1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Ante la existencia del problema jurídico-social, urge la necesidad de una solución; puesto que, vulnera un derecho fundamental como el acceso a la justicia, así como también incita al ejercicio abusivo del derecho, pudiendo llegar hasta una restricción de la libertad. Es por ello que partiendo de esta justificación de corte social, se buscará la comprensión de la necesidad de los alimentos como un elemento de apoyo en base a la responsabilidad que le corresponde al progenitor que debe otorgarla, desde luego con ello se pretende alcanzar un equilibrio en las condiciones de ambas partes.

Jurídicamente también existe una justificación en tanto que se aprecia como elemento originario de la vulneración el artículo 565 A del Código procesal Civil, el mismo que se advierte como inconstitucional, precisamente por la condición de igualdad que estaría faltando completar en el proceso mismo, respecto a la tutela jurisdiccional. Esto es, al seguir manteniendo el artículo en referencia, seguiremos teniendo los problemas sociales que hasta la fecha aquejan a un sector de la población, especialmente a ese sector social más vulnerable.

Entonces, habiendo encontrado la importancia de la presente investigación, también se puede deducir su justificación, puesto que existe claramente la aplicación de un artículo del código civil, que causa perjuicio y sobre todo es inconstitucional su aplicación. Por lo tanto, la investigación se encuentra justificada.

Siendo así debe señalarse también que la importancia de esta investigación radica en el reconocimiento de los beneficiarios, que será de manera general toda la ciudadanía, en tanto que se estará reforzando la seguridad jurídica que debe respaldar al ordenamiento jurídico y además será de un corte particular este beneficio en tanto sirva para la determinación de la exoneración de los alimentos, sin mayor dilación.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar si el artículo 565-A del CPC incide en los procesos de exoneración de alimentos.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar el derecho de pensiones alimenticias.
- Identificar la existencia de la vulneración dentro del proceso de exoneración.
- Indagar el ejercicio abusivo del derecho del alimentista

1.3. HIPÓTESIS

Si se exige la obligatoriedad del pago de pensiones devengadas en los procesos de exoneración de alimentos entonces se vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia e incita al ejercicio abusivo del derecho por el alimentista

1.4. VARIABLES

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

El derecho fundamental de acceso a la justicia.

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE

El pago de pensiones devengadas en aplicación del artículo 565-A del CPC

1.5. MARCO METODOLOGICO

1.5.1. POBLACION Y MUESTRA

1.5.1.1. POBLACION

Teniendo en cuenta la característica mixta de este trabajo académico, con que buscará hacer un análisis tanto a la norma, la doctrina y también recoger opiniones de ciertos especialistas en el tema abordado. En virtud a ello, ésta investigación no tiene una población propiamente dicha.

1.5.1.2. MUESTRA

Si la investigación que se propone no cuenta con una población propiamente dicha, debido a su naturaleza mixta; entonces la muestra tampoco tendría una porción determinada. Concluyendo entonces, que la presente, no se ha consignado la muestra de manera exacta.

1.6. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS, RECOLECCION DE DATOS

Los métodos aplicados en la presente investigación, sirvieron para recolectar datos y evidencias teóricas con la cual se pudo analizar y expresar conceptos propios que permitieron un mejor desarrollo sobre el tema y a su vez lograr los objetivos planteados.

1.6.1. METODOS GENERALES

✓ METODO EXEGETICO JURIDICO.

Bajo la comprensión de que este método interpretativo de las reglas se ocupa de la revisión del contenido literal de las mismas, con el fin de reconocer el verdadero sentido que le dio el legislador al momento de elaborarla. Para este caso se procedió al análisis interpretativo del artículo 565 A del Código Procesal Civil, con la intención de corroborar el carácter impositivo que incorpora en su contenido. El método aplicado permitió ahondar en el análisis y desarrollo de la realidad, con el fin de regular un precedente que inaplique o derogue normas que no sean de utilidad para la sociedad; y siendo a esta realidad se pudo validar la hipótesis.

✓ METODO HIPOTETICO DEDUCTIVO

Con este método se verificó, que éste aportaba un apoyo importantísimo en el campo metodológico, la misma que permitió elaborar la hipótesis del presente trabajo, comprendiendo su naturaleza y sus manifestaciones específicas. Teniendo en cuenta su valor lógico en tanto que ha permitido la creación de la hipótesis en función a la vinculación causal entre sus elementos que son las variables de estudio que conceptualizan tanto la causa como el efecto del problema.

✓ METODO INDUCTIVO

Este método, dio indicio de la investigación, puesto que al identificar el problema de manera particular y pormenorizada, cautivó a llevar la investigación más a fondo. Y con el material obtenido, se logró validar la investigación abordada.

1.6.2. TECNICAS

Estas han permitido realizar una recolección de datos más precisos y exactos de acuerdo a la investigación planteada, el mismo que fueron usados dentro del análisis que definieron la propuesta.

- ✓ ANALISIS DOCUMENTAL. Bajo esta técnica se pudo utilizar bibliografía, revistas, así como todo tipo de fichas que coadyuven a validar la hipótesis.
- ✓ OBSERVACION. Mediante esta técnica, se advirtió la realidad problemática y socio jurídica, que después de ser escrudiñadas, se pudo plantear una solución practica y eficaz.
- ✓ ENTREVISTA. Esta guía de entrevista, se utilizó de manera directa con los operadores de justicia y con la población de quienes se recolectó los datos cuantitativos y cualitativos, los mismos que fueron usados en el desarrollo de resultados.

CAPITULO II

En este apartado, se hizo una selección de teorías doctrinarias que coadyuven a particularizar el tema abordado y a su vez refuercen el propósito del investigador. Veamos

2.1. El derecho de alimentos

Cuando nos referimos al tema de los alimentos, lo primero que resalta es saber si realmente es un derecho o un deber y al respecto la doctrina ha puesto sobre la mesa muchas teorías. Sin embargo, para la presente investigación nos referiremos a las pensiones alimenticias como un derecho.

En ese contexto, Vodanovic (2004) lo define como aquel derecho que tienen determinadas personas que se encuentran en estado de necesidad, para exigir a otras que tienen esa obligación, ya sea por un mandato de la ley, por acuerdo mutuo o por acuerdo unilateral de un tercero (pág. 4).

Tal cual se aprecia de la cita, se trata de un derecho que se puntualiza sobre condiciones específicas, la obligación se puede dar en razón del vínculo, sin duda alguna el parental será aquel que conlleve a la correcta determinación, esto en función al entroncamiento que se pueda demostrar en el desarrollo del proceso civil. De otro lado se tiene la condición de obligación, que es aquella fase luego del reconocimiento

del vínculo que condiciona una cuestión de responsabilidad, así el mandato judicial tendrá la función coercitiva ante la posible existencia de incumplimiento de la obligación que pudiera existir en un orden natural.

Para el profesor Ramos (2007), quien deja entender que es un derecho creado por la ley, mas no como derecho natural que le corresponda al que se encontrará en estado de necesidad, sino, veamos lo que señala: En ese derecho que la norma brinda a una persona, con el objetivo de obligar a otra que se encuentra en plena capacidad de otorgárselo. Ello en función a su posición, disposición económica o social, y que debe cubrir el sustento necesario (pág. 525).

Si bien es cierto, la condición natural no es el escenario general el cual se proyecta sobre el derecho de los alimentos ello no implica el retiro del razonamiento en función al origen de los alimentos; siempre habrá de existir un enlace entre lo que se concibe como punto de partida o del origen de la vida, con la obligación del progenitor para asistir al nuevo ser con los alimentos que necesita para sobrevivir. Las condiciones en las que se presentan tanto social como económicamente cambiarán la connotación del respaldo pero no desestima la obligación, puesto que debe ser otorgado en razón de las capacidades.

Para Rojina (2007) en una misma postura que los anteriores señala que es aquella facultad que tiene una persona denominada

alimentista para exigir este derecho, siempre y cuando exista algún tipo de parentesco o algún vínculo que preceda de matrimonio (pág. 265).

Al mismo tiempo, en que la doctrina busca consolidar conceptos e ideas sobre las pensiones alimenticias, pues resulta que la jurisprudencia también a hecho un pronunciamiento a través de sus sentencias: Expediente N° 00014-2012-0-1201-JP-FC-03; en su fundamento segundo indica que es:

El derecho que tiene una persona a exigir alimentos a otra que por lo general está vinculada por algún parentesco o vínculo matrimonial, pero este derecho es natural de todo ser humano, por ello, que el legislador al introducirlo en la ley no ha hecho más que reconocer un derecho más fuerte que en ella misma (pág. 2).

Como se puede advertir en la jurisprudencia, tampoco se tiene un concepto uniforme, puesto que la primera señala que es una creación jurídica, la otra señala que propio y natural del ser humano y que la ley solo canaliza ese deber y obligación.

Si bien es cierto, puede existir una fina línea de discrepancia en cuanto la conceptualización, pero modernamente se habla de un derecho natural del ser humano pero protegido por las legislaciones en su más amplio sentido.

Por ello, Reyes (1999), menciona que:

Es un derecho que corresponde a todo ser humano, es un derecho natural que se origina por la naturaleza misma del ser humano, por ende, debe ser considerado como derecho de primera clase, puesto que, su omisión conllevaría al aniquilamiento del mismo. (pág. 777).

Bajo esa postura Valdez (2006) señala que:

Es un derecho esencial para toda persona, porque sin los alimentos correspondientes, no se podría llevar una vida saludable. Por tanto, sin este sustento no podría existir la continuación de la especie o el cuidado de la prole. Por ello, se considera que este derecho atraviesa la totalidad de derechos humanos. Y es uno de los pilares fundamentales de la pobreza, así como su atención para combatirla. (pág. 2).

En ese sentido es que las normas nacionales han visto oportuno cada vez nuevos mecanismos para proteger a los niños y adolescentes que han sido desamparados por sus progenitores.

Ahora, de esta misma manera De La Fuente (2018) nos indica:

Que el derecho de alimentos es un derecho protegido por la carta magna, es decir que es un derecho constitucional, señalado en su artículo 4, que a su vez señala que la comunidad y el estado (...) protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconociendo a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Asimismo, en el artículo 6 establece lo siguiente: es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (...) y que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Adicional a ello, “el artículo 27 de la convención americana de derechos humanos, queda recogido el derecho del niño a ser alimentado por sus progenitores (...)”. Se entiende por alimentos todo lo necesario e indispensable para satisfacer las necesidades de la vida. (pág. 3).

2.2. Pensiones alimenticias

Para los autores Tafur & Ajalcuña (2004), mencionan que:

Es una responsabilidad natural y ética el darles alimento a sus hijos. Precizando que, la definición alimentaria corresponde a todo lo que es necesario para la subsistencia. Pudiendo ser por parte de uno de los cónyuges, ascendientes o responsables del cuidado del que se encuentra en estado de necesidad, pudiendo asistir en dinero o especie con la finalidad de sufragar las necesidades esenciales (pág. 171).

Asimismo, el autor Carrillo (2017) Manuel Zurita Sánchez; señala que está referida a un importe que perciben de forma periódica determinadas personas con derecho a recibirlas de otra persona (pág. 24).

Por otro lado, el jurista Peralta (2008) reconoce las características de renunciable, agregándole el hecho de poder ser transigible y con posibilidad de ser comprensible, transferible y con el tiempo prescriptible, para las pensiones de fijadas ya sea de manera voluntaria u ordenada por un Juez, especialmente a las pensiones de alimentos devengadas. (pág. 564 y 571)

Por el contrario, si consideramos lo que Ossorio (1981) nos explica como pensión alimenticia, él explica que el concepto se entiende como el medio que ayudará a la subsistencia de una persona y que es entregada por los mismos parientes que cumpla tal fin. (pág. 713)

Sin embargo, para Castan (1966) lo que sostiene y sustenta la obligación legal de otorgar una pensión alimenticia es el vínculo de solidaridad y en los intereses acumulados que exista en el entorno familiar. (pág. 254-256)

Si vemos desde otra perspectiva en la Sentencia 00024-2010-0-1011-JP-FC-01, analizando su fundamento tercero nos especifica que debemos considerar las condiciones para establecer una

asignación familiar o también llamada pensión de alimentos. Puesto que, en el código civil señala que la fijación debe ser proporcional a las carencias del alimentista y a las contingencias del que quedará obligado, precisando sus responsabilidades ineludibles a las que se encuentre sujeto, también precisa que es innecesario realizar un arduo esclarecimiento sobre los ingresos de la persona demandada, dado que finalmente se tendrá como base dos premisas: Primero, el estado de necesidad del alimentista y como segundo supuesto, serían las condiciones económicas en las que se encuentre el alimentario que correspondería al demandado (Fundamento tercero).

Desde otra perspectiva, el fundamento quinto en la sentencia 00024-2010-0-1011-JP-FC-01, indica que el demandado está obligado a abonar mensualmente la obligación de asistir con una pensión para cubrir las necesidades básicas y de realización para el alimentista de acuerdo a su etapa etaria, como por ejemplo (vestido, alimentos, servicios de salud, formación en su educación, lo que sea necesario para su capacitación para el trabajo, los cuales no necesitan probanza alguna puesto que son evidentes, agregando que el alimentista se encuentra en pleno desarrollo de su persona y requiere una calidad de vida adecuada para su completo desarrollo tanto físico, emocional y social, por lo que es necesario el apoyo efectivo y continuo de aquel que no permanece a su total cuidado, por lo que la progenitora al realizar gastos diversos en la atención del menor, no contaría con los recursos suficientes para poder

cubrir todos los gastos, es por ello que el apoyo del progenitor se considera necesario, para darle una mejor calidad de vida al menor (fundamento quinto).

CAPITULO III

3.1. Exoneración de las pensiones alimenticias

Según el autor Del Aguila (2015) la exoneración se establece a quien brinda la obligación alimenticia (el obligado a hacerlo) y este ya no continuaría por efectuar el pago mensual que tuviera a su cargo con respecto a la obligación con el alimentista. (pág. 115)

En sentido contrario, el autor Aguilar (1998), menciona que la exoneración de las pensiones alimenticias se considera una interrupción a la obligación de alimentar a otra persona, es decir, lo considera una liberación o descargo temporal. (pág. 94)

Desde el punto de vista del autor Coca (2021) establece que:

Exonerar tiene como sinónimo dispensar, absolver, perdonar, liberar del cargo del alimentante sobre la obligación alimentaria. O sea, un supuesto de exonerarse de la obligación alimentaria sería igual a la extinción de la misma. (pág. 1)

Nuevamente, mencionando el Código Civil (2021), que en su artículo 483, manifiesta que quien mantendría la obligación de asistir

con la pensión alimenticia, puede solicitar la exoneración en el caso disminuyeran sus ingresos, acreditando que su subsistencia estuviera en peligro, en el caso de seguir asistiendo con alimentos o también el caso de que el alimentista ya no se encuentre en necesidad. Asimismo, el artículo especifica que, para las pensiones que fuesen otorgadas por Resolución judicial, ya desaparecería la obligación con respecto al progenitor, pero si llegara a acreditar la necesidad por parte del alimentista por causas de incapacidad física o psicológica, así como también en los casos donde aún se encuentre cursando estudios profesionales o de algún oficio siempre y cuando acredite que prosigue en los estudios de manera exitosa, podría solicitar que la obligación continúe vigente (pág. 1).

Además, en los fundamentos décimo y undécimo de la Sentencia Expediente N° 00014-2012-0-1201-JP-FC-03, en el cual:

Las causales y los criterios para requerir la exoneración de alimentos, en el caso limite sus ingresos, acreditando que no puede atenderlo sin poner en peligro sus necesidades propias, para su subsistencia, pudiéndose solicitar también en el caso de que la necesidad del alimentista haya desaparecido.

Así como en el párrafo anterior también se analiza el mismo postulado señalado por el código civil, en el cual menciona que, para las pensiones alimenticias originadas por resoluciones judiciales, estas quedan sin efecto en el momento que el alimentista llegue a

cumplir la mayoría de edad, pero existirían escenarios en los que el alimentista podría solicitar que la obligación persista o permanezca vigente, como por ejemplo los casos donde el alimentista posee una incapacidad física o psíquica acreditada, y por este motivo no pueda hacerse cargo de sus necesidades de manera personal, de igual manera perduraría la vigencia cuando esté realizando estudios exitosos, ya sea de alguna profesión u oficio, en estos casos también puede solicitar que la obligación persista siempre y cuando pueda comprobar estos supuestos. Entonces, sintetizando la norma, esta sostiene que la exoneración de alimentos se puede otorgar cuando se encuentre en peligro la subsistencia del alimentante con respecto a sus necesidades, dado que disminuyeron sus ingresos en el transcurso del tiempo; de otra manera también se puede solicitar cuando haya desaparecido el estado de necesidad del alimentista con respecto a su minoría de edad; y finalmente cuando haya adquirido los dieciocho años de edad, habiéndose dado la extinción del estado de necesidad, el alimentista esté condicionado a la dependencia de alguien por un estado de incapacidad física o psicológica debidamente acreditada o también cuando persista la realización de estudios exitosos de manera acreditable, debemos tener en cuenta la aprobación exitosa de estos estudios ya sean profesionales o de algún oficio, se llevaran a cabo dentro de márgenes razonables en un tiempo aceptable para culminarlos, como también sus resultados obtenidos y en base a este análisis se

podría entender mejor la norma citada (Fundamentos décimo y undécimo).

Ahora, con respecto a lo manifestado por la Dra. Sánchez, afirma que:

De acuerdo con la ley N° 29486 publicada el 23 de diciembre del 2009 y que fue incorporada al artículo 565 del CPC se tendría que comprobar al momento de la demanda que se encuentra al día en los pagos de su obligación. Esto es considerado requerimiento especial para la presentación de la demanda que ha sido incorporado a la norma procesal debido a que los alimentantes intentaban excluirse de la responsabilidad manteniendo pendiente la deuda por prestación de alimentos de la que solicitaba una variación o disminución. Pero debemos considerar que a la fecha el requisito mencionado no está siendo interpretado de una manera correcta ya que, al momento de admitirse la demanda, el juzgador exige la documentación que acredita la prestación de alimentos (págs. 1-2).

Por otro lado, tomando como referencia el PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA AÑO JUDICIAL 2014, en su segunda ponencia no se propuso proporcional ni razonablemente aceptado que los mayores de 28 años sigan siendo asistidos por una pensión alimenticia. Entonces proponen la automatización del proceso de exoneración; debiendo en todo momento certificar la vigencia de su

estado de necesidad que imposibilita la atención propia para su subsistencia por causas de alguna dependencia originada por una incapacidad física o psicológica, siempre y cuando estoy haya sido acreditado en un proceso inicial. Esto fundamentado según la ley que no permite ni protege el abuso del derecho como parte de la acción, por lo que se realizó la aprobación por unanimidad de la segunda ponencia, pero, agrega que no se debería efectuar de manera automática, sino que corresponderá correr traslado a la parte, verificando el domicilio en los registros civiles a fin de efectuar su derecho de defensa y se llegue a resolver. Así también el alimentante deberá presentar en el petitorio de exoneración en el mismo proceso donde se ha fijado la pensión de manera extraordinaria se podrá realizar un nuevo proceso en el cual presentará las copias certificadas de la parte concerniente al proceso principal.

CAPITULO IV

4.1. La tutela jurisdiccional efectiva del derecho

Tutela jurisdiccional efectiva del derecho:

En lo concerniente que el autor Ticona (1999) analiza y manifiesta en su libro, que la efectiva tutela jurisdiccional corresponde al derecho público tiene las características de subjetivo y abstracto y le corresponde a toda persona, asimismo se le faculta a exigir del estado un imparcial y justo juzgamiento ante un juez que sea competente, que tenga las características de independiente; cuya finalidad versa en la pronunciación sobre los intereses de las pretensiones indicadas en un plazo razonable, proporcional y de forma motivada, buscando la ejecución de manera plena, solicitando la eficacia de la sentencia obtenida. (págs. 37-28)

La tutela jurisdiccional efectiva está generalizando que no exista una negación de justicia y que así no resulte vulnerada por realizar algún rechazo de alguna demanda que no haya sido subsanada con respecto a algunas omisiones.

Debe precisarse que la efectividad con la que los órganos jurisdiccionales atienden las peticiones formuladas, por lo que no basta

con el solo atendimento por el 6rgano, sino que para que la tutela sea realmente concebida de ser efectiva y no solo en la celeridad con la que fue atendida, sino por la efectividad de los mecanismos judiciales durante todo el tiempo que se llev6 a cabo el proceso.

De esta manera entonces, la efectiva tutela jurisdiccional es el derecho que le corresponde a toda persona para que se le procesa con la realizaci6n justa de su pretensi6n con respecto a otra pretensi6n aludida, el cual debe ser atendido por los 6rganos jurisdiccionales.

Todo lo antes referido, tiene amparo jur6dico en el art. I del t6tulo preliminar del c6digo procesal civil.

En ese mismo orden de ideas, en el expediente N6 4080-2004-AC/TC de la sentencia del Tribunal Constitucional, ha se6alado que:

En una posici6n subjetiva, un derecho constitucional es aquel derecho que cualquier persona puede acceder ante los 6rganos judiciales, mediante un representante o de manera directa, en ejercer sin ning6n tipo de obst6culo los medios de defensa que la ley establece; de poder obtener una decisi6n razonable la cual est6 fundamentada en derecho; y, por 6ltimo, de pedir ejecutar la resoluci6n de fondo que se obtuvo (Fundamento 14).

En sentido contrario, a través del Expediente N° 00014-2012-0-1201-JP-FC-03, en su sentencia, exactamente en su fundamento Segundo, establece que:

A cualquier sujeto de derecho le corresponde y eso le otorga la facultad de reclamar la solución de sus diferencias de interés mediante un procedimiento en el cual se cumplan las garantías procedimentales básicas, finalizando con una decisión correcta objetivamente, incluso cuando sus intereses no resulten beneficiados; ya que lo realmente importante es que siempre una persona tiene el derecho de obtener una resolución en derecho con todos los requisitos procesales que se requieran (Fundamento 2).

CAPÍTULO V

5.1. El ejercicio abusivo del derecho

Según Vargas (2015), sobre el ejercicio abusivo del derecho:

Existe el ejercicio abusivo del derecho como institución jurídica, pero esta es limitada por el ejercicio abusivo como institución jurídica, la cual limita a los derechos subjetivos, ya que toda conducta arbitraria será rechazada, porque produce un perjuicio a un tercero, esto proviene de una corriente socializadora del derecho.

Entonces desde este punto de vista la teoría del abuso del derecho permitirá analizar su ilicitud o licitud de un derecho bajo la óptica de las reglas morales de la buena fe y del respeto a las buenas costumbres.

Según COCA según este mismo concepto de ideas, él considera:

Que el abuso del derecho se encuentra en las conductas lícitas y las que son tipificadas como ilícitas las cuales resultan válidas como instituciones, lo cual fue recogido por los textos normativos de manera correcta (tanto de 1936 como de 1984); la cual se puede aplicar a todo el sistema jurídico y no solo al derecho civil, puesto que así también lo determina el artículo 103 de la constitución

vigente, es por ello que el logro mayor solo puede devenir por el desarrollo jurisprudencial.

Podríamos decir que el abuso es una variante de la antijuricidad o ilicitud, que se desprende el derecho civil y se despliega a otros ámbitos del derecho, lo cual le es competencia de la jurisprudencia sobre su contenido y, por ende, desarrollarlo. Es menester recordar que, al igual que la antijuricidad o ilicitud, la acción del abuso en la ejecución de los derechos es factible de darse mediante una acción u omisión.

Y que estas provoquen una lesión antijurídica o ilícita a otro supuesto que no está contemplado por una norma singular, es decir, cuando se deje sin protección alguna a un tercero; en otras palabras, el deber general de evitar daños a terceros y de la cual su contenido está en constante crecimiento y desarrollo debido a la jurisprudencia (pág.1).

Por el contrario, la corte suprema de justicia la sala constitucional social transitoria, en su sentencia según el expediente 559-2022:

En artículo segundo del título preliminar, se ha considerado como un límite judicial que está expreso en nuestro código civil basado en que el individuo de derecho puede ejercitar sus derechos atribuidos, pero ellos no significan que pueda ir más allá de él y lesionar o causar daño a terceros o a los intereses de ellos que no

especifica la norma expresamente. Ya que este hecho tendría incluido la intención de realizar un daño y la ausencia del interés de perjudicar relevantemente, modo que no es apegado a la conducta de buena fe o buenas costumbres ni los valores morales recíprocos de la sociedad lo cual no ha sido presentado en el caso concreto ya que al exigir solicitando el cumplimiento de la obligación de parte de la actora, que estuvo siendo asumida por el ejecutado, corresponde a la acción de un legítimo Derecho civil (Fundamento 5).

Por el contrario, el conocido autor Rodríguez (2004), alude que el abuso del derecho es:

Como un principio general que llega a ser un instrumento, pero aquí es donde el actuar del Magistrado, que debe estar presto y alerta manteniéndose siempre prudente reconociendo el interés existencial los y patrimonial, presto a poder enfrentar valientemente los modelos jurídicos que pretenden paralizar los intereses de los actores (pág. 12)

El autor Morales (2016), establece que es el derecho ejercido regularmente, pero el ejercer el mismo resulta contrapuesto al principio de buena fe y se afecta el legítimo interés de un tercero, el cual no se encuentra protegido por una norma jurídica en particular.

La institución jurídica en la historia transcurrida ha tenido el objetivo de limitar la libertad individual en el caso que este atente contra la debida marcha de la sociedad. Por ejemplo, el propietario de una casa que impregne dibujos obscenos ocasionando perjuicio al legitimo interés de terceros quienes desean vivir en un vecindario digno será constituyente de abuso de derecho. Con relación al abuso del derecho, este se configura entre el ejercicio irregular y regular de un derecho.

El mismo se denota cuando el sujeto abusador se comporta conforme a ley, pero lastima un legítimo interés o derecho ocasionada por alguna laguna en específico del derecho, la cual debe regularse ya que atenta contra la vida en sociedad estable.

Como ya es sabido, no existe un pacto sobre cuáles son los requisitos que deben concurrir para la configuración del abuso del derecho, y sostenemos que estas son las más importantes: 1- La existencia de una norma jurídica que reconoce un derecho. 2- Este derecho debe sostener algunas limitaciones, es decir que sea relativo. 3- La producción de ese derecho por un sujeto o por la omisión del mismo con lo cual se afecta el legítimo interés de otro

sujeto. 6- Se deduce que el ejercicio del mismo va en contra del principio de buena fe y normas de convivencia social (pág. 1)

Para Espinoza (2003), el abuso del derecho es un arma, en cuanto principio general, mediante el cual el operador jurídico se sustenta para poder lograr una debida y justa dirección de justicia. Podemos visualizar que recién aquí es donde se desarrolla un papel definitorio la actividad sensata del juez, el cual debe reconocer los novísimos intereses patrimoniales y existenciales, afrontando de manera suspicaz los diversos proyectos legislativos que intentan su no movilidad. (pág. 20)

5.2. Acciones legales que contravienen la norma jurídica

El reconocido jurista Obando (2017), señala:

Los fraudes de la ley, la desviación de poder y el abuso de derecho, si bien son tipos de ilícitos atípicos, estos también son susceptibles de entenderse como problemas de las prescripciones normativas de supra inclusión y “La ley no ampara el abuso de derecho”, es decir que el derecho no abarca una antinomia entre las demás reglas de lo establecido jurídicamente.

Empero, lo que se intenta lograr en el fraude a la ley, de manera indirecta, es realizar lo establecido legalmente. Fernández Sessarego cita a Spota el cual establece que “en el fraude a la ley se

respetar lo que está en ella, sin embargo, se esquiva su espíritu, lo que significa que se realizan actos lícitos aparentemente, pero en sí lo que buscan es el resultado de algo prohibido. (pág. 01)

Punto contrario en lo expuesto por el autor Valadés (2002) el cual afirma que: Es primordial poder detectar primero los principios generales a los cuales debe sostenerse el incumplimiento de la norma para así no romper el Estado de derecho, haciéndose responsable de que las condiciones culturales sean las mas adecuadas para poder conseguir una mejor valoración adecuada de las decisiones de la autoridad.

En este ámbito, se entiende que el incumplimiento de lo normado no afecta al Estado de derecho siempre y cuando se realicen las circunstancias a continuación:

- La autoridad si pasa por alto la aplicación lo establecido normativamente, lo realiza porque no habría mayor daño que cuando si se hubiere aplicado.
- La inaplicación de la norma no puede no ser resultado del accionar negligente del funcionario.
- La legitimidad de origen de la autoridad.
- La concurrencia de los llamados instrumentos políticos de control, igualmente legítimos, los cuales deben analizar el actuar de la autoridad quien inaplicó lo normado.
- En absolutamente todos los casos debe ser bien pensada la postura de inaplicar la norma.

- La inaplicación jamás se podrá entender como una práctica derogatoria.
- Es excepcional la no aplicación.
- La inaplicación continua tendrá que ser examinada por los diferentes órganos quienes se encargan de producir leyes para que analicen las posibilidades de su posible reforma o de las diversas condiciones de vigencia de la norma. Los motivos de la no aplicación de lo normado tendrán que ser investigados por los órganos de control político relacionando a las políticas publicas que las provocan o que no las solucionen.
- La inaplicación de una norma será revocable o enmendable siempre (pág. 01)

Por todas las teorías formuladas de los distintos autores renombrados a nivel nacional e internacional, recién se podrá esclarecer el tema de investigación con el propósito de que se pueda entablar una investigación propositiva que se nos ayude a resolver un conflicto social mas notorio, es decir, en cuanto al ejercicio del derecho abusivo del lado de los demandantes.

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS Y RESULTADOS

En esta sección, mostraré los resultados obtenidos, con la cual se va a estructurar los objetivos de la investigación, los mismos que nos darán certeza para validar la hipótesis.

Siendo una investigación mixta, donde se analiza la jurisprudencia y la teoría, así como los plenos jurisdiccionales distritales que hayan hecho un pronunciamiento respecto al tema abordado, de donde pudimos concluir la viabilidad de la postura planteada en la presente investigación. Veamos:

6.1. ENCUESTAS APLICADAS A LOS OPERADORES DE JUSTICIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

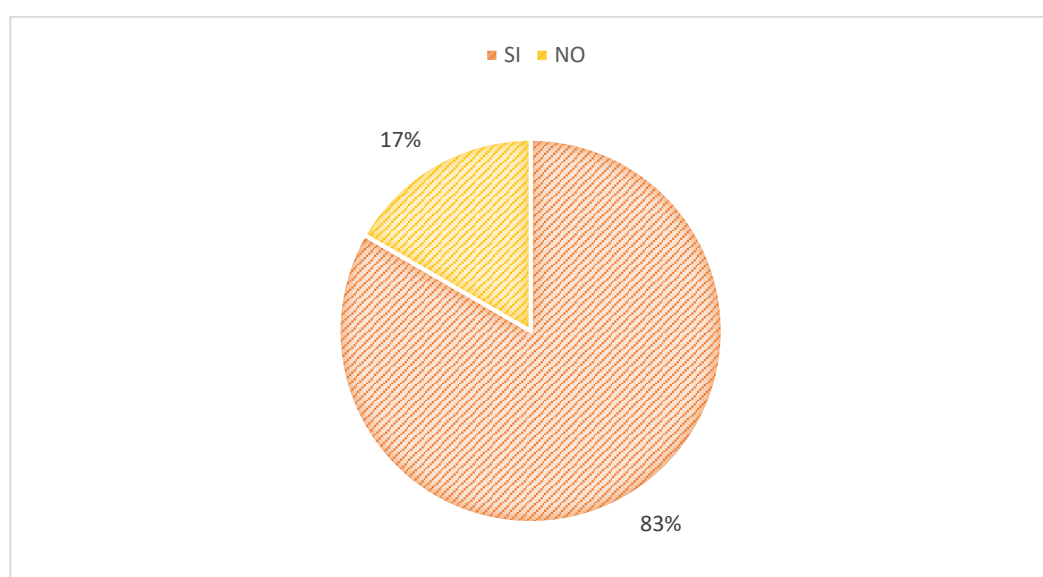
- ¿Considera usted que el artículo 565-A del código procesal civil vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia?

Después de haberse planteado la interrogante, se obtuvo un resultado, la misma que vamos a tabularlo a fin de que se llegue a un mejor análisis conclusivo.

Respuestas:

SI	NO	TOTAL
17	3	20

Gráfico N° 1



Análisis:

De las 20 personas encuestadas, 3 personas del total (15%), coinciden que NO debería inaplicarse el artículo en mención, todo que ello no implicaría desproteger al menor en estado de necesidad y por ende se trasgrede al interés superior del niño.

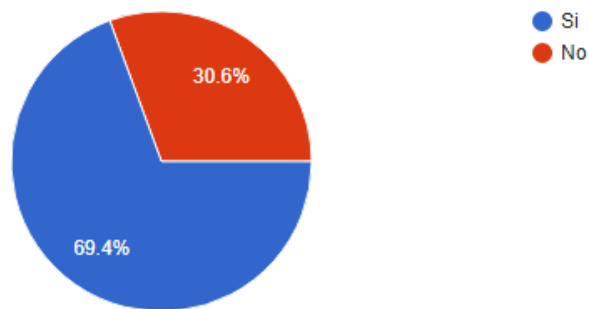
Sin embargo, 17 personas que representan el 75%, responden de manera POSITIVA (SI), esto es que debe inaplicarse el artículo puesto en cuestión.

6.2. ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD JURÍDICA EN GENERAL

Recurrimos a la tecnología que está en boga hoy en día, a efectos de poder recoger el sentir de los jóvenes respecto al planteamiento de la presente investigación. y para ello recurrimos a 85 personas, como muestra de nuestro análisis. Veamos:

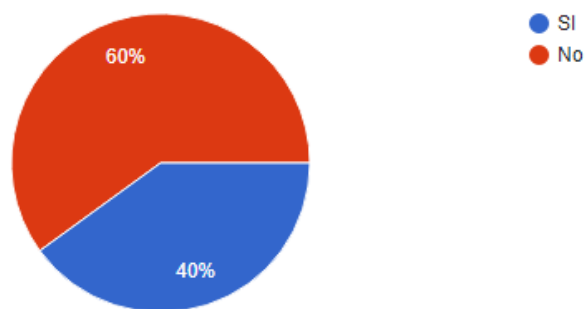
1. ¿Debe exigirse estar al día con la pensión alimenticia para que se admita la demanda de exoneración de alimentos?

85 respuestas



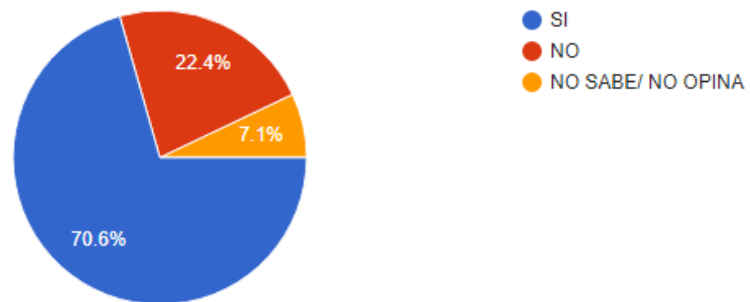
2. Si el alimentista tiene 21 años edad (no estudia pero tampoco tiene alguna discapacidad) y solicita el pago de la pensiones devengadas ¿Debería el juez ordenar que se le pague?

85 respuestas



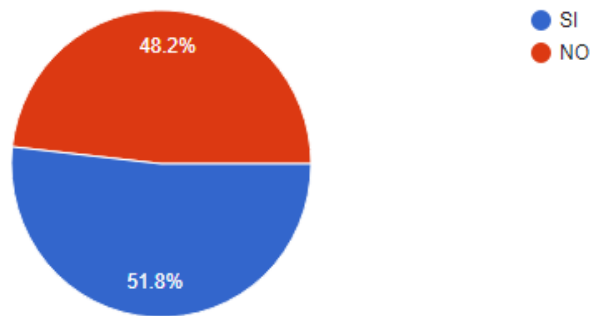
3. Si el alimentista mayor de edad no cumple con los requisitos para conservar la pensión designada, demandara el pago de las pensiones devengadas a sabiendas que no le corresponde ¿Debería recibir una sanción por falsedad y mala fe?

85 respuestas



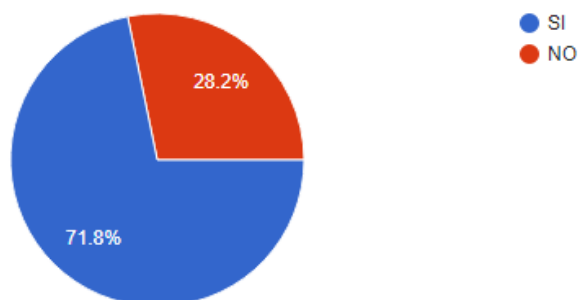
4. Toda persona tiene Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero al solicitar estar al día con las pensiones alimenticias y declarar inadmisibile e improcedente la demanda de exoneración de alimentos ¿Crees que se vulnera un derecho fundamental del acceso a la justicia?

85 respuestas



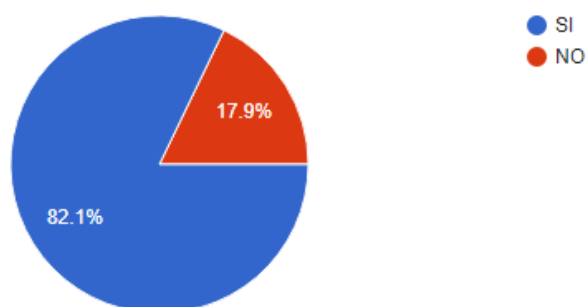
5. El Tercer Pleno Casatorio Civil se caracteriza por la flexibilización de los procedimientos en materia de Familia ¿Considera usted, que el juez en mérito a ello pueda admitir la demanda de exoneración de alimentos?

85 respuestas



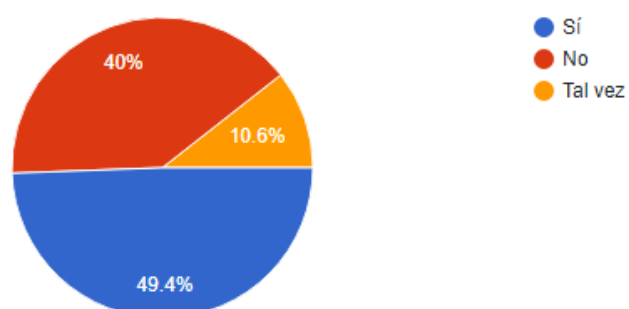
6. El Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia - Lima 2011, por mayoría 22 a favor y 21 en contra, dispusieron que las demandas exoneración deben admitirse teniendo en cuenta la cuestión de fondo y no la formalidad rígida de la norma ¿En ese sentido, estás de acuerdo con el Pleno Jurisdiccional?

84 respuestas



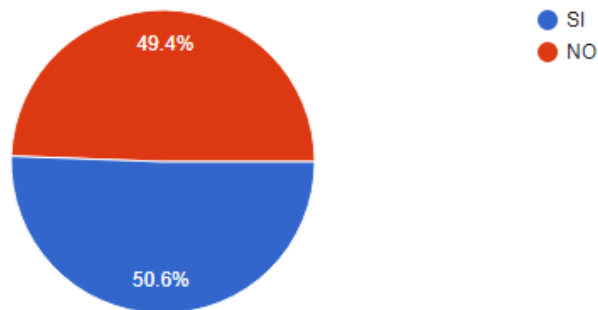
7. ¿Crees que la exoneración de alimentos debe ser de manera automática al cumplir el alimentista mayoría de edad, salvo prueba en contrario?

85 respuestas



¿Crees que la existencia del artículo 565-A cede el paso al ejercicio abusivo del derecho por parte del alimentista?

85 respuestas



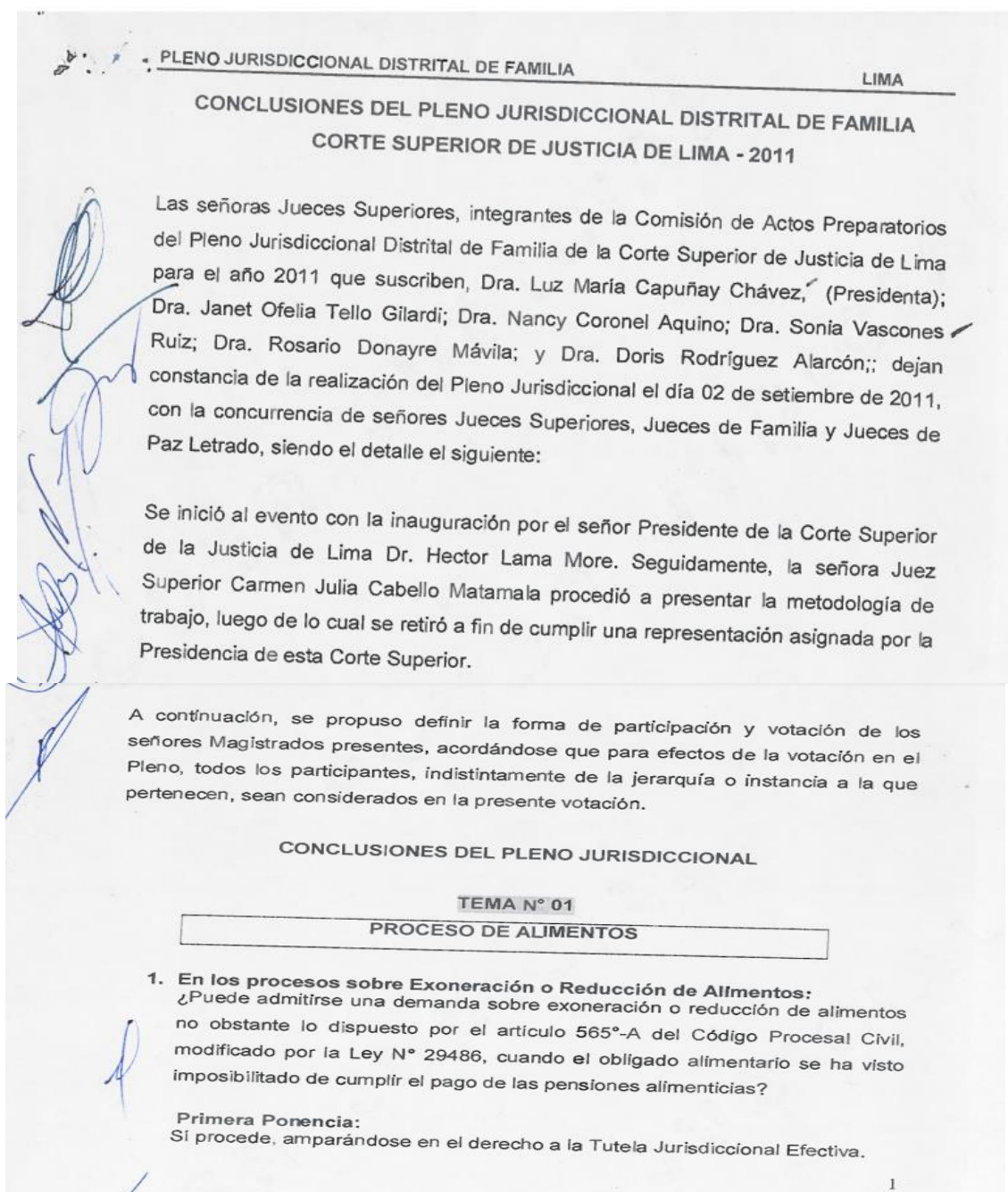
Análisis:

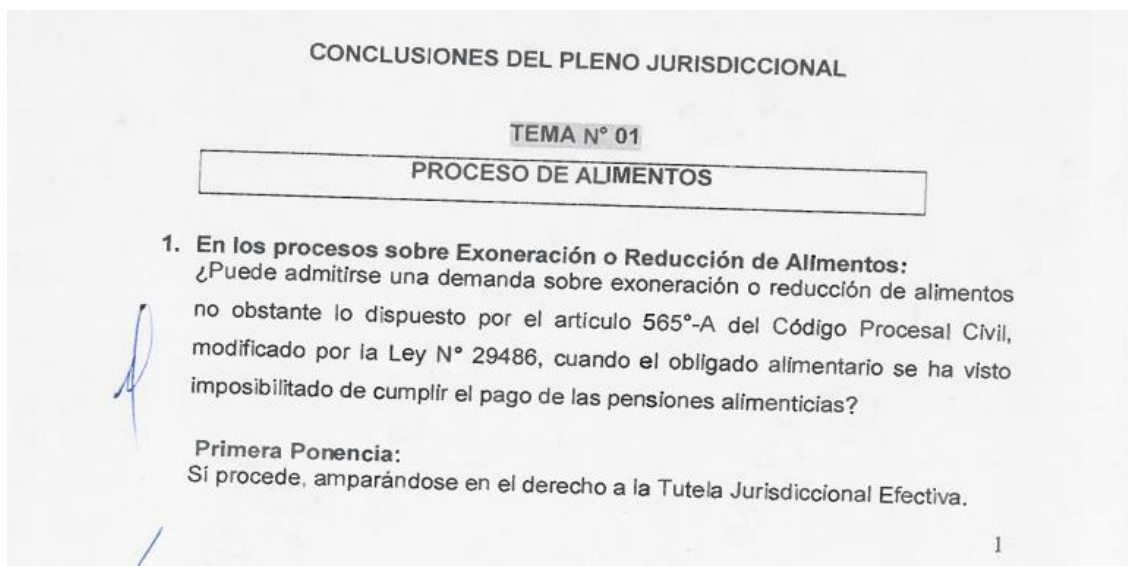
De las 85 personas encuestadas, se concluyó de cada una de las interrogantes que el tema abordado por el investigador tiene asidero tanto jurídico como legal. Dejando claro que la presente encuesta responde a los objetivos trazados y a su vez valida la hipótesis primigenia.

6.3. ANALISIS AL PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA - LIMA -2011

La preocupación sobre el tema abordado ha sido desde ya hace muchos años, por la cual se ha venido dando algunos intentos por solucionar este problema, pero que hasta la fecha no ha tenido mucha trascendencia con la solución planteada.

Si no veamos a qué conclusión se llegó en el referido pleno jurisdiccional:





Análisis:

Se advierte que, dentro de este debate, se discutió sobre si debería aplicarse el artículo 565-A en los procesos de exoneración de alimentos. Llegando a la conclusión mayoritaria que sí, precisamente al amparo del derecho constitucional del acceso a la justicia, así como el derecho al debido proceso.

No obstante, debe considerarse la otra postura, en la cual es un grupo muy considerable que piensa que debe aplicarse tal artículo, por una cuestión de legalidad.

Se llega a la conclusión de la presente investigación, que existe argumentos válidos y suficientes para no aplicar el artículo 565-A del código procesal civil.

CAPÍTULO VII

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

7.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Corresponde en este capítulo contrastar los resultados obtenidos.

- Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar y analizar el derecho de pensiones alimenticias”.

¿Cuál es la definición mas adecuada del derecho alimenticio?

Podríamos partir desde el punto de vista desde la existencia de un obligado y un beneficiario, porque solo desde este punto un beneficiario tiene derecho a exigir ser alimentado mientras no tenga la capacidad jurídica o excepcionalmente la norma lo disponga.

Por ello, en el sentido mas amplio, CABANELAS lo conceptualiza, como la asistencia que en especie o en dinero y que por ley contrato o testamento, se dan a una o varias personas para su manutención y subsistencia, entendiéndose como alimentos, comida, vestido, educación, entre otros.

Pero veamos que dice la carta magna, la cual señala que es un deber y un derecho de los padres, alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (...).

En ese mismo orden de ideas se pronuncia el código civil en su artículo 472, señala que se entiende como alimentos lo que es indispensable para el sustento de los hijos (...).

Y finalmente, consagra el concepto el código de niños y adolescentes en su artículo 92, que a su vez prescribe que se considera alimentos a lo necesario para subsistencia digna de los hijos.

Como vemos, queda claro entonces que el derecho alimentario es un acto natural para cubrir necesidades básicas de los hijos en edad de velar por sí mismos.

¿Qué características tiene las obligaciones alimentarias?

Las obligaciones se pueden deducir que son, personales, irrenunciables, reciproca, indivisible e indeterminada, no estando sujeta a embargo. Entonces de ello se puede concluir que, el concepto de derecho alimentario se rige por las características planteadas.

TOMA DE POSTURA

Es necesario referirse sobre el derecho alimentario, como a su definición, trascendencia que ayudará a comprender desarrollo social y humano; con la cual podemos entender e inclinarnos que el derecho a una pensión alimenticia es indiscutible, llegando a concluir este derecho como un derecho primordial.

- Discusión sobre el objetivo: Identificar el derecho vulnerado en el proceso de exoneración de alimentos.

¿Qué se entiende por un derecho vulnerado?

Al tocar un tema tan particular y controvertido, pues surge innumerables factores que podrían conllevar a identificar el modo y la forma de un derecho vulnerado; sin embargo, en el caso concreto, se entiende como derecho vulnerado al incumplimiento de una norma que protege derechos de otras personas. Es decir, el daño que causa una persona con sus acciones u omisiones a otra, y que ese derecho está amparado en la ley.

¿Qué se entiende por el derecho de exoneración de alimentos?

Como se ha señalado en el derecho alimentario, también el obligado con una pensión tiene derecho a solicitar que se le exonere, principalmente cuando en el alimentista ha cesado su derecho como tal.

Entonces, se entiende que una exoneración, es aquella cuando en el obligado cesa esa obligación.

TOMA DE POSTURA

Ante los llamados derechos vulnerados, en la presente investigación, tenemos no solo al derecho de acceso a la justicia, sino que también, se está que el artículo en cuestión incita a un ejercicio abusivo del derecho.

Por tanto, nuestra postura tiene la viabilidad y la contundencia de los argumentos para inaplicar el referido artículo.

- Discusión: Indagar el ejercicio abusivo del derecho de alimentista.

¿Qué se entiende por ejercicio del derecho?

Hablamos de un ejercicio del derecho, cuando una persona en todas sus facultades civiles puede accionar para ser tutelado un derecho, es decir que el ejercicio del derecho también está relacionado al interés y legitimidad para obrar por propia cuenta.

¿Qué se entiende por ejercicio abusivo de un derecho?

Para poder entender la siguiente pregunta, podríamos partir invocando a ese adagio donde señala que: “el derecho de uno termina donde empieza el del otro”, es decir que no puedes reclamar un derecho si este atropella el derecho de alguien más. Entonces, de acuerdo a nuestra legislación, un ejercicio abusivo del derecho es condenable y sancionado.

Y en el caso de un alimentista, que reclama una pensión de alimentos aun cuando este ya no tiene la calidad de tal, pues esta ejerciendo un derecho abusivo como tal, puesto que se aproveche de la norma para conseguir tal fin.

TOMA DE POSTURA

El ejercicio abusivo del derecho en los procesos de alimentos se ha ido naturalizando, por cuanto si tenemos claro los conceptos sobre el mismo, podremos entender e identificar el momento en que se está ejerciendo de manera abusiva un derecho. Quedando claro entonces que el ejercicio abusivo del derecho no solo parte del accionante, sino que este se concreta con la decisión del juez.

7.2. RESULTADOS DE LA VALIDACION DE LA HIPOTESIS

La construcción de esta fase de la investigación se proyecta sobre el sentido de cada uno de los elementos que componen la hipótesis, esto

es los conceptos que se incorporan mediante las variables a fin de establecer su nivel de validez con lo cual se podrá establecer un esquema determinante, este se alcanzará con la unión de las variables validadas.

Respecto a la variable independiente: El derecho fundamental de acceso a la justicia.

En principio, debe aclararse que se ha designado como variable independiente, por la función que cumple, es decir por el problema que engloba y que es la causa que origina el problema y de ahí el cuestionamiento del investigador; esto quiere decir, que se verificó la existencia de razones justificantes asumidas como elementos para su validación, en tal sentido la variable en su concepto señala o describe el origen de la problemática, la cual se toma como punto de partida de la investigación.

Luego de haber establecido la pauta que conlleva a la validación correspondiente a la hipótesis, a través de sus variables, se despejó cualquier duda sobre la viabilidad del tema propuesto; habiendo sido respaldado por las discusiones de los datos en los análisis propuestos.

Partiendo de los aspectos más relevantes en función a la demostración que se alcanza con el discurso crítico desarrollado a través

de las discusiones centradas en función a la meta específica que se vincula con esta variable, esto es al concepto que describe el efecto que se ocasiona mediante aquella restricción del acceso a la justicia; además de ello, se ha podido alcanzar demostración del daño generado, es por lo mismo que se ha dirigido la atención sobre la posibilidad inaplicar del referido artículo; de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y jurídicas, es que la variable de estudio queda validada mediante la siguiente afirmación lógica:

El derecho fundamental de acceso a la justicia resulta idóneo en los procesos de exoneración de alimentos aun cuando estos no están al día con las pensiones devengadas.

Con relación a la variable dependiente: El pago de pensiones devengadas en aplicación del artículo 565-A del código procesal civil en los procesos de exoneración de alimentos.

Tal cual se han seguido las pautas para la construcción analítica que corresponde al concepto descriptivo de la fase independiente de la concepción sobre los orígenes de la problemática, se hizo necesaria la comprobación de los contenidos incorporados en base a esta temática de los efectos que se producen en relación a la anterior variable, por lo cual se ha podido corroborar la existencia de perjuicios ocasionados a nivel

jurídico, esta indicación será usada con la intención de producir el respaldo de los postulados en este trabajo académico.

Según lo que resultó de la investigación mediante el análisis y los aporte doctrinarios es posible señalar que resulta acertada la identificación del problema correspondiente al acceso a la justicia, la cual limita que los justiciables sean atendidos y encuentren tutela jurisdiccional efectiva.

Entonces, el efecto que se consigue al aplicar la regla que se toma como referencia en este análisis, será una concreta vulneración el contenido de los derechos fundamentales como es el caso aquel vinculado al acceso a la justicia, amparada por la constitución política del Perú; de acuerdo a ello es que se ha tenido como determinación respecto a la variable analizada, una fase validada del concepto y se indica como:

La aplicación del artículo 565-A del código procesal civil, afecta negativamente al derecho fundamental de acceso a la justicia.

7.3. CONTRASTACION Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para realizar la contrastación conclusiva, esta debe elaborarse con la participación de cada uno de los elementos que compusieron la hipótesis inicial, pero en esta fase con la incorporación de los resultados que validan el sentido de cada una de las variables iniciales; debiendo esta ser contrastada con la hipótesis inicial. Así:

CONTRASTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS	
HIPÓTESIS INICIAL	HIPÓTESIS CONCLUSIVA
Si se exige el pago de pensiones devengadas sin mayor análisis en aplicación del artículo 565-A del código procesal civil en los procesos de exoneración de alimentos entonces se vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia e incita al ejercicio	El derecho fundamental de acceso a la justicia resulta idóneo en los procesos de exoneración de pensión de alimentos aun cuando estos no están al día con las pensiones devengadas, por tanto, la aplicación del artículo 565-A del código procesal civil, afecta negativamente al derecho

abusivo del derecho por el alimentista.	fundamental de acceso a la justicia.
---	---

Haciendo la respectiva contrastación entre la hipótesis inicial y la hipótesis conclusiva; esta ha dado un resultado positivo. Y a partir de aquí, se harán las siguientes conclusiones de la investigación.

CONCLUSIONES

PRIMERO. Del análisis de la jurisprudencia y las encuestas realizadas se ha determinado que condicionar al alimentante a estar al día con las pensiones alimenticias para acceder a la justicia, vulnera de manera directa el artículo 139 inciso 3 de la constitución política del Estado.

Puesto que la Carta Magna garantiza la tutela jurisdiccional y el debido proceso, precisando que nadie debe ser negado acceder a la justicia. Sin embargo, el artículo 565-A del código procesal civil impide acceder a la justicia ante un proceso de exoneración de alimentos por cuando esto restringe un derecho fundamental.

SEGUNDO. Del análisis de la investigación se ha concluido que el juzgador al momento de calificar la demanda debe verificar los medios probatorios que manifiesten si corresponde la exigencia de estar al día con las pensiones alimenticias. Caso contrario, la

demanda debe ser admitida y resulta con un pronunciamiento de fondo.

TERCERO. En la presente investigación, se ha determinado que los alimentistas realizan un ejercicio abusivo del derecho, puesto que hacen efectivo el cobro de las pensiones devengadas cuando no tienen la calidad de necesidad; sin embargo, la norma ampara a ciegas el derecho del alimentista, llegando al punto de ser denunciar por omisión a la asistencia familiar, es por ello que, el obligado cumple con el pago que legalmente no corresponde.

CUARTO. Según la investigación, muchos de los obligados a asistir una pensión, han terminado condenados a prisión con pena efectiva de la libertad, por una deuda inexistente, es decir el alimentista hizo efectivo el cobro de una pensión que ya no le correspondía. Entonces, como se advierte, mantener un artículo como el referido es un error jurídico, por las consecuencias que acarrea.

Recomendaciones

1. La postura que se propone, es necesaria y útil, y está dentro de los lineamientos tanto jurídicos y sociales. Por tanto, se estaría adecuando las normas de acuerdo a la realidad social.

2. Que el Estado debe cumplir su rol social, buscando a través de sus órganos correspondientes, generar precedentes que garanticen la aplicación idónea de las normas.

PROPUESTA

La propuesta que se plantea en la presente investigación parte de los resultados de campo y de la jurisprudencia recogida. Y en base a ello, se ha planteado lo siguiente:

Artículo actual: 565 -A	Artículo Modificado 565- A PROPUESTO
Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimentaria.	Para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensión alimentaria, no es necesario acreditar estar al día con la pensión alimentaria, sino se calificará de los medios probatorios adjuntados para ser exigida.

Donde se ha demostrado que existe la vulneración de un derecho constitucional, como es la tutela jurisdiccional y el acceso a la justicia.

BIBLIOGRAFÍA

00024-2010-0-1011-JP-FC-01, 00024-2010-0-1011-JP-FC-01 (1° Juzgado de Paz Letrado- Sede paruro 30 de Setiembre de 2010).

Aguilar Llanos , B. (1998). *Instituto jurídico de los alimentos*. Lima: Cultural Cusco.

Carrillo Cando, D. (2017). *Los Derechos Constitucionales de Niños Niñas y Adolescentes no efectivos en relación a la Pensión Alimenticia que deben los Padres que están en el Extranjero,debiendo Legislarse para que regresen y trabajen juntamente con el Estado y cumplan la obligación*. Loja: Universidad Nacional de Loja.

Castan Tobeñas, J. (1966). *Derecho Civil Español. Común y Floral*. Madrid: Reus.

Coca Guzman, S. (2021). *Pensión de alimentos: ¿Qué abarca y cómo calcularla?* Lima: LP Pasión por el derecho.

Código Civil. (2021). Lima: Ediciones legales.

De La Fuente Hontañon, R. (2018). Últimas tenencias en derecho de alimentos: análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. *Gaceta Constitucional*.

Del Aguila Llanos, J. C. (2015). *Guía práctica de derechos de alimentos. Doctrina, modelos de escritos y jurisprudencia*. Lima: UBI LEX ASESORES SAC.

Espinoza Espinoza, J. (2003). Código Civil Comentado. *Gaceta Jurídica*.

Moráles Cáceres, A. (2016). *El abuso de derecho en el Derecho Societario Peruano*. Lima: Portal Agnitio.

N° 00014-2012-0-1201-JP-FC-03, 14-2012 (Tercer Juzgado de Paz Letrado de Huánuco- Corte Superior de Justicia de Huánuco 02 de Octubre de 2012).

- Obando Blanco, R. (2017). Principios generales. El abuso del derecho y la buena fe. *Juridica- Suplemento Análisis Legal*.
- Ossorio y Florit, M. (1981). *Diccionario de ciencias políticas y sociales*. Buenos Aires: Heliasta.
- Peralta Andía, J. r. (2008). *Derecho de Familia en el Código Civil*. Lima: IDEMSA.
- Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia Año Judicial 2014. (2014). Lima: Corte Superior de Justicia de Lima.
- Ramos Pazos, R. (2007). *Derecho de Familia*. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Reyes Rios, N. (1999). *Derecho Alimentario en el Perú: propuesta para desformalizar el proceso*. Lima: Derecho PUCP.
- Rodriguez Mendoza, J. J. (2004). Ejercicio abusivo del derecho. *Revista Apertura*.
- Rojina Villegas, R. (2007). *Compendio de Derecho Civil. Introducción, Personas y Familia*. México: Porrúa.
- Sánchez Villafuerte, R. (s.f.). *El interés superior del niño y del adolescente. Interpretaciones y Modificaciones en el Ambito Civil y procesal civil*. Lima: Poder Judicial del Perú.
- Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 0059-2002 (Sala Constitucional y Social Transitoria 30 de Abril de 2003).
- Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 4080-2004-AC/TC, 4080-2004-AC/TC (Tribunal Constitucional 28 de Enero de 2005).
- Tafur Gupioc, E., & Ajalcuña Cabezudo, R. (2004). *Derecho alimentario*. Lima: FECAT.

- Ticona Postigo, V. (1999). *El debido proceso y la demanda civil*. Lima: Rodhas.
- Valadés Ríos, D. (2002). La no aplicación de las normas y el Estado de Derecho. *Revista Jurídica UNAM*.
- Valdez Córdova, P. (2006). El Nuevo Proceso de Alimentos en la Legislación peruana. *Revista Internauta de Práctica Jurídica*.
- Vargas Flores, R. L. (2015). *El ejercicio abusivo del derecho y su relación en la sobrecarga procesal del poder judicial. El ejercicio abusivo del derecho y su relación en la sobrecarga procesal del poder judicial. universidad Nacional de Trujillo*. Trujillo: Escuela de Postgrado .
- Vodanovic Haklicka, A. (2004). *Derecho de Alimentos* (Cuarta ed.). Santiago de Chile: Lexis Nexis.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 14-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Luisita Reyna Celeste Juárez Pucse**.
Siendo las 16:00 p.m. del día martes 07 de marzo del 2023 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: **"EL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO Y LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL PERÚ"**, designados por Decreto N° 197-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 13 de setiembre del 2021, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE	: Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ.
SECRETARIO	: Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO.
VOCAL	: Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ

La tesis fue asesorada por Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, nombrada por Decreto N°197-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 13 de setiembre del 2021.


El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°016-2023-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 03 de marzo del 2023.

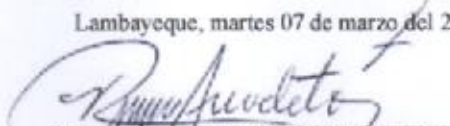
La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Luisita Reyna Celeste Juárez Pucse** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADA con la nota de 16 (Dieciséis) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 17:16 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link: https://drive.google.com/file/d/1p3hYa048aUZTFcaITRMpVbZHI-Mb_Be9/view?usp=share_link

Lambayeque, martes 07 de marzo del 2023


Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
Presidente del Jurado

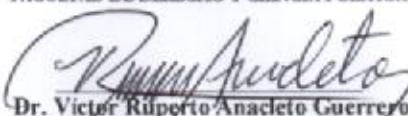

Dr. VICTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
Secretario del Jurado


Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
Vocal del Jurado.

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 14-2023-UI-FDCP correspondiente a Luisita Reyna Celeste Juárez Pucse, evento que se ha realizado de manera virtual el día martes 07 de marzo del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 10 de marzo del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

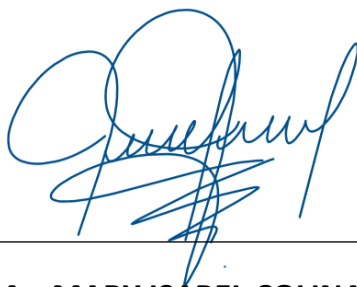

Dr. Victor Ruperto Anacleto Guerrero
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO, Asesora del tesista: JUAREZ PUCSE LUISITA REYNA CELESTE, luego de la revisión exhaustiva de su Tesis titulada **"EL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO Y LAS PENSIONES ALIMENTISTAS EN EL PERÚ"**, constado que la misma tiene un índice de similitud de **8 %** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender, la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 16 de febrero del 2022.



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá verla información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	Luisita Reyna Celeste Juarez Pucse
Título del ejercicio:	TESIS
Título de la entrega:	EL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO Y LAS PENSIONES ALIM...
Nombre del archivo:	TESIS_FINAL_-_JUAREZ_CELESTE_modificaci_n_turnitin.docx
Tamaño del archivo:	1.99M
Total páginas:	73
Total de palabras:	9,848
Total de caracteres:	51,875
Fecha de entrega:	07-feb.-2023 10:47a.m (UTC-0500)
Identificador de la entre...	2008554589



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA

EL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO Y LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL PERÚ

INFORME DE ORIGINALIDAD

8%

INDICE DE SIMILITUD

9%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

2

repositorio.upn.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

3

1library.co

Fuente de Internet

1 %

4

hdl.handle.net

Fuente de Internet

1 %

5

Submitted to Universidad Señor de Sipan

Trabajo del estudiante

1 %

6

www.revistas.unitru.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

7

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

8

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

< 1 %

9

cybertesis.unmsm.edu.pe

Fuente de Internet



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA